**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO**

**DEL VALLE DEL CAUCA**

**Auto Interlocutorio**

**RADICADO 76001-33-33-000-2020-00299-00**

**DEMANDANTE: DE OFICIO**

**AUTORIDAD: MUNICIPIO DE DAGUA**

**MEDIO DE CONTROL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DECRETO No. 063 DE 2020**

**ASUNTO**: **NO ASUME EL CONOCIMIENTO**

**MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO**

Santiago de Cali (V.), treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020).

1. **ANTECEDENTES**

El Municipio de Dagua remitió vía electrónica el Decreto 063 del 25 de marzo 2020 con el fin que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca asumiera el control inmediato de legalidad de que trata el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, correspondiéndole por reparto, el asunto a este Despacho.

1. **CONSIDERACIONES**

El artículo 214 de la Constitución Política establece cuales son las disposiciones a las que se deben someter los estados de excepción y también indica la prohibición de suspender los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por su parte el artículo 215 Ibídem, autoriza al Presidente de la Republica a declarar el Estado de emergencia cuando se presenten circunstancias distintas a las previstas en los artículos 212 y 213 ibídem, que perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país o que constituyan una grave calamidad pública.

Una vez efectuada la declaratoria, el presidente puede expedir Decretos legislativos, que tienen que estar suscritos por todos los Ministros y deberán referirse a materias que guarden relación directa y específica con el Estado de Excepción.

Ahora bien, el Congreso de la Republica expidió la Ley 137 de 1994 “Ley estatutaria de los Estados de excepción” y en su artículo 20[[1]](#footnote-1) indicó que las medidas de carácter general que sean dictadas en ejerció de la función administrativa y en desarrollo de los Decretos legislativos durante los Estados de excepción, tendrán control de legalidad inmediato por parte de la autoridad de lo contencioso administrativo del lugar donde se expidan si se trata de entidades territoriales o por el Consejo de Estado si emanan de autoridades nacionales.

El control de legalidad al que hace referencia el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 fue desarrollado en el artículo 136 del CPACA[[2]](#footnote-2), que, además, aclaró que la autoridad judicial debía asumir de oficio el conocimiento del asunto, en caso de que la entidad administrativa no efectuare el envío del acto sujeto a control.

De conformidad con las normas mencionadas, los actos administrativos que están sujetos a control inmediato de legalidad deben cumplir las siguientes dos características: **i)** *ser de carácter general y* ***ii)*** *ser expedidos en desarrollo de los Decretos legislativos expedidos por el presidente de la República, es decir, debe contener disposiciones tendientes a la ejecución o aplicación del Decreto legislativo.*

Ahora bien, por medio de Decreto 417 de 2020, el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica con el fin de asistir la crisis económica y social derivada de la pandemia Covid-19, y en virtud de ello ha expidió varios Decretos legislativos.

En el presente asunto y de la revisión del contenido del Decreto No. 063 del 25 de marzo de 2020 expedido por el Municipio de Dagua “***POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DERVIDADA DE LA PANDEMIA DEL COVID 19****”,* se advierte como único sustento la calamidad pública que atraviesa el Municipio de Dagua por la pandemia Covid - 19, calamidad pública regulada por la Ley 1523 de 2012[[3]](#footnote-3), misma que no requiere de la declaratoria del Estado de Excepción como el que trata el articulo 215 superior y que fue decretado a nivel nacional a raíz de la grave e inminente situación de emergencia sanitaria del País.

El hecho de que el acto administrativo citado guarde relación con la pandemia del Covid-19 no lo convierte, *per se*, en susceptible de control inmediato de legalidad, pues, es necesario que haya sido expedido en desarrollo de un Decreto legislativo.

Por lo anterior, el Decreto No. 063 del 25 de marzo de 2020 remitido por el Municipio de Cartago no es susceptible del control inmediato de legalidad de que tratan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de que pueda ser demandado a través de los demás medios de control que prevé el CPACA. Por consiguiente, el Despacho no asumirá el conocimiento del mismo, por las razones expuestas.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sala unitaria,

**RESUELVE:**

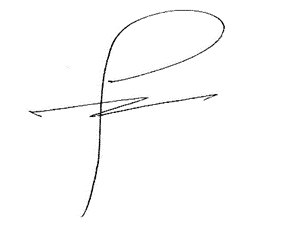
**PRIMERO: NO ASUMIR EL CONOCIMIENTO** del control inmediato de legalidad del Decreto 063 de 2020, expedido por el Municipio de Dagua, por las razones expuestas en este proveído.

**SEGUNDO:** Por secretaría, **NOTIFICAR** esta providencia por vía electrónica a la autoridad remitente (Municipio de Dagua) y al Ministerio Público. Además, **ORDENAR** que esta providencia se publique en la página web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocimiento de la comunidad.

**TERCERO:** Una vez ejecutoriada esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

El magistrado**,**

****

**JHON ERICK CHAVES BRAVO**

1. ARTÍCULO 20. CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. [↑](#footnote-ref-1)
2. ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento. [↑](#footnote-ref-2)
3. Por el cua se adpta la política Nacional de Gestión de riesgo de desastres y se establece el Sstema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y se dictan otras disponsiicones [↑](#footnote-ref-3)